

FUKUSHIMA Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENERGÍA

(Primera parte)

Si la opinión pública no fuera inconstante en sus intereses y opiniones, para cuando la central nuclear de Fukushima en Japón dejase de ser fuente de noticias en los informativos mundiales (aunque siga emitiendo radiación a niveles alarmantes), el debate nuclear debería haber entrado en una nueva fase en todo el mundo. Los detractores de esa forma de obtención de energía han tenido en el accidente una prueba adicional, y una argumentación renovada, para concienciar a la gente de algo tan evidente como paradójicamente desapercibido: que las centrales nucleares son espacios efectivamente letales para la salud humana y para el equilibrio ecológico de forma directa y también diferida.

Podría pensarse que la aquiescencia de la opinión pública hacia lo nuclear ha retrocedido por lo que respecta a 1986, cuando el reactor número 4 de Chernóbil esparció su nube radioactiva por Europa, pero es difícil que nada cambie de veras en los planes nuclearizantes del mundo con respecto a los anteriores al terremoto y ulterior maremoto del pasado 12 de marzo. Quienes cuentan con más de 30 años han sido testigos de movimientos antinucleares mucho más sensibilizados de los que se han visto estas semanas. Por añadidura, para aplacar las malas conciencias y las

suspicias hacia una energía acerca de la cual se demanda muy poca información, los responsables políticos e ingenieros de lo nuclear han abusado de la demagogia farragosa para anunciar "su intención de considerar el aplazamiento en los planes de construcción de nuevas centrales para las próximas dos décadas", y "mejoras sustanciales en las instalaciones, con sistemas adicionales de refrigeración y nuevos edificios de contención en torno a los reactores".

Es sorprendente que con un tema tan potencialmente lesivo para la salud los ciudadanos ejerzan tan escasa supervisión. ¿Qué organismo, qué medio de comunicación, qué Secretaría de Estado... se encargará de comprobar la implantación de esas pruebas de resistencia una vez la alarma sensacionalista por Fukushima y el 25 aniversario de Chernóbil se hayan desvanecido? El hecho mismo de que estas actuaciones fueran anunciadas levanta las suspicias de cualquier ciudadano, pues la pregunta natural es: ¿cómo es posible que ahora, de pronto, se pueda mejorar la seguridad de las centrales? ¿Es que hasta ahora no se contaba con la más estricta regulación y control?

Los *lobbies* defensores de esta fuente de energía han pasado semanas poniendo en valor lo bien que resistió la central japonesa ante dos catástrofes naturales sucesivas de magnitud histórica, y sobre todo el hecho de que, de las 55 centrales con que cuenta el país nipón, solo una ha

puesto en peligro a su entorno. El tiempo siempre corre a favor de los pronucleares, pues una vez nuevos temas - nuevas catástrofes, nuevas guerras, nuevos desafueros políticos, nuevas gestas deportivas- desdibujan las imágenes de Fukushima y de Chernóbil, podrán reemprender su campaña de persuasión.

Quienes defienden la energía nuclear tienen de su parte un factor no poco valioso para ganarse el apoyo de la opinión pública: el optimismo. Como ciudadanos optimistas, enaltecen las ventajas de esta forma de energía alejando del pensamiento la perspectiva de un accidente, y lo hacen porque dicen confiar "en la ciencia, en la técnica y en el progreso". Como ciudadanos optimistas, presentan las centrales nucleares como la panacea del desarrollo porque: 1) producen una energía pretendidamente limpia y sin emisiones de CO₂; 2) generan puestos de trabajo y actividad económica allá donde se instalan; 3) permiten a los países gozar de independencia energética.

En cualquier caso, el marco real sobre el que se debe representar el dilema nuclear no es el de una confrontación entre "amantes del progreso luminoso", por un lado, y "ecologistas retrógrados mercaderes del miedo al cataclismo", por el otro. Y no lo es porque en la evaluación de la viabilidad nuclear no se tiene en cuenta el precio real de los residuos radiactivos, ni el coste que los gobiernos deben afrontar en caso de accidente;

básicamente, se está operando unas centrales de altísima peligrosidad sin un seguro. ¿Puede alguien pensar en cuánto se incrementaría el precio de la energía eléctrica obtenida de las centrales nucleares si se añadiera la prima de ese seguro?

La ley nos obliga a vivir en casas aseguradas contra incendios y a circular en vehículos que cuentan con un seguro a terceros, aunque nadie espera que ni su casa sea pasto de las llamas, ni cuenta con sufrir un accidente automovilístico; las centrales, sin embargo, manejan la energía más mortífera de todas sin contar con ningún seguro, en el más disparado alarde de inconsciencia de todos los que ha hecho nuestra especie en sus milenios de historia.

No hay empresa aseguradora en el mundo que accediese a asegurar una central nuclear simplemente porque el coste que tendría que afrontar en caso de accidente sería inasequible. Allá donde falla el mercado entran el estado como asegurador de último recurso (véase <http://www.world-nuclear.org/info/inf67.html>), y por consiguiente son los ciudadanos quienes sin ser conscientes juegan cada día a la lotería de los potenciales costes de un accidente nuclear, costes que asumirían con sus impuestos y con el riesgo de su salud y de sus vidas, y lo hacen guiados por el optimismo de los *lobbies* y la ceguera de los gobiernos.

En el caso de que los ciudadanos pagasen el precio real de energía nuclear, una vez los estados obligasen a añadir esa prima del seguro imprescindible, ¿de veras sería tan rentable esta forma de energía?

Optar por la energía nuclear en las circunstancias actuales es, en realidad, como optar por llevar a un hijo a un colegio multilingüe y muy prestigioso, pero rodeado de minas antipersona: no habría compañía que asegurase la vida de ese niño. Por su parte, el hijo aprendería a caminar por un sendero seguro, pero en el caso de que un día este perdiera el equilibrio por cualquier motivo, perdería como mínimo su integridad física. Estoy convencida de que algunos papás preferirían poner en riesgo la vida de su hijo a cambio de una educación exclusiva, pero la mayoría preferirían hijos sanos y menos políglotas.

Es imprescindible, por tanto, que los gobiernos añadan al precio de la energía nuclear una tasa aseguradora que además contemple su impacto ecológico a medio y largo plazo, de modo que la ciudadanía conozca, de una vez por todas, el precio real de esta forma de energía.

(Fin de la primera parte)

AMY MARTIN